

Boletín Oficial.

PROVINCIA DE ORENSE.



ADVERTENCIA OFICIAL.

Las leyes y disposiciones generales del Gobierno, son obligatorias para cada capital de provincia donde se publican oficialmente en ella, y desde cuatro días después para los demás pueblos de la provincia. (Ley de 28 de Noviembre de 1857.) Las disposiciones de las autoridades, excepto las que sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficialmente, como asimismo cualquier anuncio concerniente al servicio de la Nación que dimanase de las mismas, pero los de interés particular pagarán su inserción, entendiéndose en este caso con el Editor del BOLETÍN.

SE PUBLICA TODOS LOS DIAS EXCEPTO LOS DOMINGOS.

PRECIOS DE SUSCRICION.—En Orense, por trimestre, 7 pesetas.—Para fuera de esta capital, franco de porte, por trimestres adelantados, 8 pesetas.
—Números sueltos, 38 centimos.
Se suscribe en esta capital, Imprenta de José M. Ramos. Colon, número 16.
—En las demás provincias, en las principales librerías.

PRIMERA SECCION.

PARTE OFICIAL.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. el Rey (que Dios guarde), S. A. R. la Serenísima Señora Princesa de Asturias y las Sermas. Sras. Infantas Doña Maria de la Paz y Doña Maria Eulalia, continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

(Gaceta núm. 190.)

MINISTERIO DE LA GOBERNACION.

REALES ÓRDENES.

La Sección de Gobernación del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen:

«Excmo. Sr.: Publicada en debida forma la vacante de la titular de Medicina de Híndelaencina, se presentaron los aspirantes D. Claudio Casado, Licenciado en Medicina y Cirujía, y don Manuel Catalina, Facultativo habilitado de segunda clase.

La Junta municipal, en consideración á que este último había desempeñado la plaza durante 26 años y prestado buenos servicios en época de epidemia, acordó, por mayoría de doce votos contra uno, nombrarle Médico titular.

Contra esta resolución entabló recurso de alzada D. Claudio Ca-

sado, fundándose en que había sido postergado á un Facultativo de segunda clase, y el Gobernador desestimó el recurso por considerar que el título que posee Catalina le habilita para el ejercicio de la profesión médica y en razón á que no se han dictado disposición alguna que obligue á las Juntas municipales á dar preferencia á los Doctores y Licenciados en Medicina y Cirujía para ocupar las plazas de Médicos titulares.

Contra esta providencia acude D. Claudio Casado ante el Ministerio del digno cargo de V. E., y en su virtud ha sido remitido el expediente á informe de la Sección, que considera destituida de fundamento la pretensión del recurrente.

En efecto, el art. 8.º del reglamento para la asistencia facultativa de los enfermos pobres de 24 de Octubre de 1873 dice que que los Facultativos municipales habrán de ser Doctores ó Licenciados en Medicina y Cirujía, «ó poseer cualquier título legal de los que habilitan para el ejercicio de estas profesiones.»

No se da preferencia á ninguna de esta clase de Facultativos, y por tanto, las Juntas municipales pueden elegir libremente el aspirante que consideren más apto para desempeñar el cargo, si bien es de desear que en igualdad de circunstancias fuesen preferidos los que tengan títulos académicos superiores.

La aptitud de los aspirantes en el caso á que este expediente se contrae es la misma ante la ley, puesto que uno y otro están facultados para ejercer libremente la profesión médica, y si es cierta la superioridad del título de D. Claudio Casado, tam-

bien lo es que D. Manuel Catalina ha prestado durante 26 años sus servicios facultativos al vecindario, y los méritos contrados en tiempo de epidemia son circunstancias especiales dignas de ser tenidas en consideración por la Junta municipal de Híndelaencina al proveer la vacante, y su acuerdo debe en consecuencia subsistir por no contener infracción legal.

Opina por lo tanto la Sección que procede desestimar el recurso interpuesto.»

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Junio de 1879.—Silvela.—Sr. Gobernador de la provincia de Guadalajara.

(Gaceta núm. 275.)

Habiendo llegado á conocimiento de este Ministerio que algunas corporaciones provinciales y municipales al contratar por medio de la licitación los servicios y obras públicas costeadas con sus fondos prescindían de ciertos requisitos, hoy esenciales en esta clase de contratos, desatendiendo por completo las referencias que el artículo 78 de la ley provincial y el 19 de la de obras públicas hacen respectivamente á la de 20 de Setiembre de 1865 y Real decreto de 27 de Febrero de 1852; S. M. el Rey (Q. D. G.), de conformidad con lo propuesto por este Ministerio, de acuerdo con la Dirección general de Administración local, ha tenido á bien disponer

que haga V. S. entender, tanto á la Diputación como á los Ayuntamientos de esa provincia, que para la contratación de toda clase de servicios y obras públicas que proyecten, cuyo coste llegue á 50.000 pesetas, es indispensable la doble subasta, requisito establecido en el reglamento é instrucción, complemento de la ley, y Real decreto anteriormente citados, cuyos preceptos son de rigurosa observancia desde que la vigente ley de obras públicas los ha hecho extensivos á las provinciales y municipales.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Setiembre de 1879.—Silvela.—Sr. Gobernador de la provincia de.....

Vista la consulta hecha por V. S. en 30 de Mayo último respecto de la inteligencia que debe darse al art. 41 del reglamento de exenciones físicas tan luego termine el plazo de tres meses que el citado artículo señala para la celebración del juicio de exenciones por causa de inutilidad física;

S. M. el Rey (Q. D. G.) se ha servido disponer se manifieste á V. S.:

1.º Que los mozos á quienes se refiere el citado art. 41 son los que no acudan á hacer la oportuna alegación de sus presuntas inutilidades dentro del plazo señalado en dicho artículo; mas no los que absolutamente carezcan de inutilidad que alegar.

2.º Que lo dispuesto en el mismo artículo no se opone á que se les declare útiles para el

servicio militar, si á juicio de los Facultativos que los reconozcan en la Caja resultase no tener defecto ni enfermedad que les exima del indicado servicio.

3.º Que en los artículos 38, 39 y 40 del reglamento citado se dispone el tiempo y modo de hacer la comprobación de los defectos por los cuales hayan sido los mozos declarados útiles condicionalmente para el servicio, sin que ninguna disposición vigente prevenga se les destine á cuerpo para ser en él observados.

Y 4.º Que al determinar el art. 153 de la ley de 28 de Agosto de 1878 que en el caso expresado en el mismo quedará el prófugo en iguales condiciones que si hubiese ingresado en Caja oportunamente, se refiere tan solo á la penalidad señalada en los artículos anteriores; mas no al tiempo y modo de alegar las exenciones que puedan asistirles, toda vez que de esto se trata en otro capítulo diferente de la ley.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de Setiembre de 1879.—Silvela. Sr. Gobernador de la provincia de Pontevedra.

Gaceta núm. 276.

Vista la Real orden dirigida á este Ministerio por el de la Guerra con fecha 9 del corriente mes, trasladando una consulta del Capitan general de Andalucía, con motivo de haberse opuesto la Comisión provincial de Sevilla, fundada en el art. 184 de la ley de 28 de Agosto de 1878, á facilitar al Gobernador militar de aquella provincia las licencias absolutas originales de los soldados licenciados del Ejército admitidos como sustitutos de reclutas destinados por sorteo á servir en Ultramar, al objeto de encabezar con los servicios acreditados en dichos documentos las nuevas filiaciones de los interesados;

S. M. el Rey (Q. D. G.) ha tenido á bien resolver:

1.º Que las Comisiones provinciales encabezen las filiaciones de los referidos sustitutos con una copia íntegra y autorizada de la licencia de cada uno.

Y 2.º Que después de compulsadas dichas licencias, queden in-

utilizadas por medio de nota autorizada estampada en las mismas.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento, y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de Setiembre de 1879.—Silvela. Sr. Gobernador de la provincia de.....

MINISTERIO DE LA GUERRA.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. el Rey (Q. D. G.) de la comunicación de V. E. fecha 19 de Setiembre último; en la que participa á este Ministerio que el Teniente del regimiento de San Marcial, núm. 46, del arma de su cargo, D. Marcial Rogado y Robles, no ha verificado su presentación al mismo después de terminada la licencia que por un mes le fué concedida para esta Corte por el Capitan general de Castilla la Vieja, habiendo principiado á usarla en 27 de Mayo del corriente año.

Enterado S. M. y de conformidad con lo que V. E. propone, ha tenido á bien disponer que el expresado Oficial sea dado de baja definitiva en el Ejército, y que se publique esta resolución en la Gaceta oficial, á fin de que, llegando á conocimiento de todas las Autoridades civiles y militares no pueda el interesado aparecer en parte alguna con un carácter que ha perdido con arreglo á Ordenanza y órdenes vigentes; quedando, no obstante, sujeto á la responsabilidad en que haya podido incurrir y al resultado de la sumaria que se le instruye si se presentase ó fuese habido.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.º de Octubre de 1879.—Campos. Sr. Director general de Infantería.

Gaceta núm. 195.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REALES ORDENES.

Excmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso de este alto Cuerpo ha consultado á este Ministerio lo siguiente:

«Excmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso de este Consejo ha examinado la demanda, de que acompaña copia, presentada por el Dr. D. German Gamazo, en nombre de D. Juan Clot y Riera, contra la Real orden expedida por el Ministerio del digno cargo de V. E. en 3 de Marzo de 1877, que desestimó la solicitud del interesado para que se dejen sin efecto las proposiciones presentadas en la subasta que tuvo lugar el día 31 de Enero de igual año para amortizar renta perpétua interior y exterior.»

Resulta que en 3 de Febrero de 1877 acudió al Ministerio el referido interesado con la pretensión de que se suspendiera el pago de las proposiciones presentadas para la dicha subasta de la Deuda, que se las dejara sin efecto y que se admitiera únicamente la suscrita por Clot, por ser la sola que fué acompañada de la cédula personal y estar mandado en la ley de presupuestos de 1876-77 que es indispensable la presentación de aquél documento para practicar algún acto civil en virtud del cual se adquirieran derechos ó se contraigan obligaciones.

Que instruido expediente, y teniendo en cuenta lo informado por la Junta de la Deuda de que la subasta no fué protestada, y que el requisito á que se refería el recurrente no se había exigido en el pliego de condiciones para la misma subasta, y que no produciendo compromiso alguno la presentación ó la oferta de un tipo para la subasta no parecía necesario exhibir la cédula personal más que para el acto en virtud del cual se aceptaba la oferta, y se contraía la obligación, recayó la Real orden de 3 de Marzo de 1877 al principio extractada, por la cual se desestimó la pretensión del recurrente.

Que el Dr. D. German Gamazo, en la representación antedicha, acudió con demanda en vía contenciosa contra la expresada Real orden alegando los fundamentos de derecho que estimó pertinentes á su propósito de que fuera dejada sin efecto.

Que pasada la demanda con sus antecedentes al Fiscal de S. M., fué de parecer de que no debía ser admitida porque la subasta á que se refería el actor había sido efectuada sin protesta, aceptándose

las proposiciones más beneficiosas, y llenando en su redacción las condiciones insertas en el anuncio de subasta, el cual prescribía la exhibición de cédula personal, y que no alegándose por el demandante la existencia de un derecho anterior en su favor ó la falta de exacto cumplimiento de las formalidades á que se subordinó el acto, faltaba la base sobre la cual pudiera apoyarse el procedimiento contencioso-administrativo en este caso.

Visto el art. 56 de la Ley orgánica de este Consejo, según el cual los que se sintieren agraviados en sus derechos por alguna resolución del Gobierno ó de las Direcciones generales que sea definitiva y cause estado, podrán recurrir contra la misma presentando demanda en vía contenciosa:

Considerando que la demanda se funda en que el actor al tomar parte en la subasta para amortización de renta perpétua verificada en 31 de Enero último, exhibió, como está prevenido, su cédula personal, requisito que no llenaron otros proponentes cuyas ofertas fueron aceptadas;

Considerando que la causa de esta aceptación fué el haberse prometido la entrega de valores á un tipo mucho más bajo que el ofrecido por el demandante; y que si bien todos los que presentaron proposiciones debieron exhibir, como él la cédula de vecindad, ó exigírseles en otro caso, con arreglo á lo que se halla establecido, la omisión de semejante requisito no produce, según la legislación vigente, la nulidad del acto, salva la responsabilidad administrativa en que puedan incurrir los que no lo llenan ó no proscriban su cumplimiento;

Y considerando que, según se ha declarado con repetición en casos análogos, para que proceda la revisión en vía contenciosa de una resolución administrativa es indispensable que dicha resolución haya podido inferir agravios á los derechos de que se crea asistido el que contra la misma reclama, circunstancia que no concurre en la pretensión de D. Juan Clot y Riera;

La Sala, de conformidad con el parecer del Fiscal de S. M., entendiéndose que no procede admitir la demanda de que lleva hecha referencia.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el de la Sala y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 de Junio de 1879.—El Marqués de Orovio.—Sr. Presidente del Consejo de Estado.

Excmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso de ese alto Cuerpo ha consultado á este Ministerio lo siguiente:

Excmo. Sr.: La Sala de lo Contencioso de este Consejo ha examinado la demanda, de que acompaña copia, presentada por el Licenciado D. Manuel Gaya, en nombre de D. José Nicolás Oviedo, contra la Real orden expedida por el Ministerio del digno cargo de V. E. en 7 de Julio de 1877, que desestimó la pretension del recurrente para que se exceptuara de la venta por la Nacion los bienes dotalés de la capellania fundada en Hortaleza por D. Juan Bantista Oviedo, y encargó á la Administracion económica de esta provincia que investigue y se incaute de los referidos bienes, dejando sin embargo en suspenso su enajenacion hasta determinar con arreglo á derecho la existencia de la familia llamada por el fundador.

Resulta que á instancia de don José Nicolás Oviedo se instruyó expediente en la Administracion económica de esta provincia, y después ante la Direccion general de Propiedades y Derechos del Estado, para la excepcion de los bienes de la capellania fundada en la iglesia parroquial de Hortaleza el año de 1611 por el Bachiller Juan Bantista Oviedo; y en vista de que el fundador habia llamado en primer lugar al disfrute de la capellania á los nietos de su hermana Isabel de Oviedo, que llevaban de apellido Moya sin hacer llamamiento en favor de los que llevarán el apellido Oviedo; por lo que podria suponerse que habian sido terminantemente excluidos, y que tal vez se hubieran extinguido las lineas llamadas por el fundador, recayó la Real orden de 7 de Julio de 1877 al principio extractada, por la cual, si bien se desestimó la instancia del recurrente, se dejó

en suspenso la venta de los bienes de la capellania, y se mandó proceder á las convocatorias y averiguaciones correspondientes á fin de determinar la subsistencia de aquel linaje:

Que el Licenciado D. Manuel Gaya, en la representacion antedicha, presentó demanda en via contenciosa contra la referida Real orden, alegando los fundamentos de derecho que estimó pertinentes á su propósito de que fuera dejada sin efecto:

Que pasada la demanda con sus antecedentes al Fiscal de S. M., fué de parecer de que no debía ser admitida porque la Real orden, segun su contexto, no parecia resolucion final; y como encargaba que se procediera á la instruccion del oportuno expediente con el fin de justificar el derecho á los bienes que pudiera asistir á los parientes del fundador, dejando en suspenso la venta si el actor probaba la eficacia de su derecho y la subsistencia de su linea entre las llamadas, no obstante lo resuelto en la Real orden, podria obtener lo que pretendia, y en su caso utilizar el recurso en via contenciosa.

Visto el art. 56 de la ley orgánica de este Consejo, segun el cual los que se estiman agraviados en sus derechos por alguna resolucion del Gobierno ó de las Direcciones generales que sea definitiva y cause estado, podrán recurrir contra la misma presentando demanda en via contenciosa:

Considerando:

1.º Que segun se ha declarado con repelicion en casos análogos, para que proceda la revision en via contenciosa de las resoluciones de la Administracion activa es indispensable que las enunciadas resoluciones sean definitivas y hayan podido lastimar los derechos de que se supongan asistidos los que contra las mismas reclaman:

2.º Que la Real orden que por la demanda se impugna si bien calificó de insuficiente la prueba suministrada por D. José Nicolás Oviedo, no puede entenderse que lastimó de un modo definitivo el derecho que le asista á los bienes de la capellania fundada en la parroquial de Hortaleza, supuesto que no niega en absoluto que estos bienes puedan exceptuarse; antes por el contrario, mantiene en suspenso su adjudicacion, y prescri-

be se instruya expediente para la investigacion de los derechos familiares que bajo el debido comprobante puedan ser reconocidos;

La Sala, de conformidad con el parecer del Fiscal de S. M., entiende que no procede admitir la demanda de que lleva hecha referencia.

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.) con el preinserto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento, el de la Sala y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de Junio de 1879.—El Marqués de Orovio.—Sr. Presidente del Consejo de Estado.

(Gaceta núm. 275.)

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. el Rey (Q. D. G.) del expediente de revision de la carga de justicia de 1.701 pesetas 73 céntimos que en partida de mayor suma se consigna bajo el número 33, capítulo y artículo 1.º, Seccion 4.ª, del presupuesto de obligaciones generales del Estado, á favor del Duque de Osuna, por el equivalente de las alcabalas que percibia en varios pueblos de la provincia de Segovia; Y resultando que por Real privilegio dado en Madrid á 16 de Noviembre de 1658 por el Rey D. Felipe IV se confirmó la carta de venta de 16 de Setiembre anterior, por la que se enajenó á D. Rodrigo de Silva Sandoval y Mendoza, Duque de Pastrana y del Infantado, las alcabalas de Martín Muñoz de las Posadas, Carbonero el Mayor, con su anejo el Barrio de Fuentes; Canencia, Bustarviejo, Navas de la Fuente, Valdemanco, Navas de Zarzuela, Labajos y Pinilla de Polendos, en la provincia de Segovia, por precio de 33.648.888 maravedis, que el comprador entregó en las Arcas Reales:

Resultando que por Real cédula de D. Felipe V, fecha en Corella á 6 de Julio de 1711, se aprobó y confirmó la venta de las alcabalas de que se trata, declarándolas preservadas de los decretos de reincorporacion á la Corona:

Resultando, por último, que la Junta de la Deuda, de conformidad con el dictamen fiscal y el Departamento de Liquidacion, propuso á este Ministerio que se

declarase subsistente la expresada carga:

Vistas las leyes de presupuestos de 1845 y 1859, la ley de 29 de Abril de 1855, las Reales Ordenes de 30 de Mayo y 2 de Junio del mismo, y la orden de la Regencia de 25 de Agosto de 1879:

Considerando que las alcabalas de que es objeto este expediente fueron segregadas de la Corona por el título oneroso de compra, cuyo precio que ingresó en las Arcas Reales, no se ha devuelto al partícipe, ni se le ha indemnizado en otra forma; y por cuya causa viene el Estado en el deber de abonarle, en virtud de lo dispuesto en el art. 16 de la ley de 23 de Mayo de 1845, una renta igual á la que dichas alcabalas hubieran producido en el año común del quinquenio de 1840 y 1844, con deduccion del 10 y 5 por 100 de administracion y arbitrios:

Considerando que la renta consignada es igual á la que figura en la relación formada en 1851 por la Direccion de Contribuciones indirectas;

Y considerando que en la tramitacion del expediente se han cumplido las prescripciones establecidas,

S. M., de conformidad con lo propuesto por la Junta de la Deuda pública y las Secciones de Hacienda y Gracia y Justicia del Consejo de Estado; se ha servido declarar subsistente la carga de justicia de que al principio se hace mérito.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos correspondientes, con devolucion del expediente original. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Setiembre de 1879.—Orovio.—Sr. Director general Presidente de la Junta de la Deuda pública.

(Gaceta núm. 199.)

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

REAL DECRETO

Visto el expediente instruido con motivo de la instancia elevada por María Luisa Celaya, pidiendo indulto de la pena de dos años, 11 meses y 11 dias de prision correccional que la Audiencia de Pamplona le impuso en causa por el delito de lesiones:

Considerando que la reo observó buena conducta antes de delinquir, y ha dado después pruebas de arrepentimiento; y al inferir las lesiones porque se le condenó, salió ella también lesionada:

Teniendo presente lo dispuesto

en la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto;

Oida la Sala sentenciadora, de acuerdo con lo consultado por el Consejo de Estado y conformándose con el parecer de mi Consejo de Ministros,

Vengo en indultar á Maria Luisa Celaya de la mitad de la pena de dos años, 11 meses y 11 dias de prision correccional que le fué impuesta en la causa de que va hecho mérito.

Dado en Palacio á diez y siete de Julio de mil ochocientos setenta y nueve.—Alfonso.—El Ministro de Gracia y Justicia, Pedro Nolasco Anriones.

TERCERA SECCION

GOBIERNO MILITAR

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Los individuos que se hallen en sus casas pertenecientes á las reserva, á la clase de reclutas disponibles ó de licencia ilimitada se presentarán en la primera quincena del mes actual al Jefe del Batallón Reserva ó de Depósito mas cercano á su actual residencia para que sean revistados personalmente; haciéndolo á los Jefes de la Guardia civil los que la distancia á los cuadros anteriores sea mas lejana; advirtiéndole á los expresados individuos que de no hacerlo serán tratados como desertores.

Orense 2 de Octubre de 1879.—El Brigadier Gobernador, Ramon Erenas.

Los Sres. Alcaldes en cuyos Municipios residan quintos destinados por suerte á Ultramar, pertenecientes á los reemplazos de 1877 y 78 á quienes en virtud de revision de expedientes hayan ingresado en el Ejército en la quinta actual, y con objeto de no causarles perjuicio, se ruega á los Señores Alcaldes en cuyo Municipio residen y tienen conocimiento de sus expedientes, den aviso á los interesados para que con certificado de la Excm. Diputacion provincial se ultime su expediente y sean destinados con licencia ilimitada con arreglo á la Real orden de 7 de Junio del presente año, debiendo efectuarlo hasta el día 15 del actual y se presenten en este Gobierno.

Orense 4 de Octubre de 1879.—El Brigadier Gobernador, Ramon Erenas.

El Excmo. Sr. Capitan General del Distrito en telegrama de hoy me dice lo siguiente:

«En telegrama circular de ayer me dice el Ministro de la Guerra, sustituciones solicitadas por reclutas sorteados para Ultramar, segun circular de 3 de Setiembre deben quedar resueltas en definitiva el día 15 del actual que espira el plazo á fin que desde el siguiente día pueda disponerse de la totalidad de los contingentes como mejor convenga al servicio, prevengalo así V. E. á Gobernadores militares y que á su vez adviertan de ello á los interesados su inteligencia.»

Lo que se publica por medio del Boletín oficial de la provincia para que los Sres. Alcaldes por su Autoridad den conocimiento de esta disposicion á todos los individuos que les haya tocado servir en Ultramar residentes en sus municipios.

Orense 4 de Octubre de 1879.—El Brigadier Gobernador, Ramon Erenas.

SÉTIMA SECCION.

JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA.

Don Alfonso XII, por la gracia de Dios Rey constitucional de España, y en su nombre don Ramon Vidal y Olivares, Juez de primera instancia de la villa de Verin.

Hago saber: que por D. Carlos Reigada Carnicero, Registrador que fué interino de la propiedad de este partido se ha solicitado en 4 de Junio último la devolucion de la fianza que prestó para ejercer dicho cargo, trascurrido que sea el término de seis meses á contar desde la fecha expresada, de conformidad todo con lo prevenido en el párrafo 3.º del art. 277 del reglamento de la ley hipotecaria vigente. Lo que se hace público quinto edicto á fin de que llegue á noticia de todos los que tengan que deducir alguna accion contra dicho Registrador por las responsabilidades en que como tal haya podido incurrir con relacion á su cargo.

Dado en Verin á 1.º de Octubre de 1879.—Ramon Vidal.—Por mandado de S. S., Gregorio Barreiro, por Reigada.

Don Manuel Valcarce Ibarrola, Juez de primera instancia de la ciudad y partido de Vigo.

Hago público: que en el día 3 del corriente fueron hurtadas del Malecón de esta ciudad, hallándose tendidas al sol como de la pertenencia de Rita Gonzalez, de esta poblacion, las ropas siguientes: dos sábanas una de lienzo de hilo con encaje ancho y la otra de algodón con un piquillo, un almohadon de tela de hilo con encaje igual al de la sábana, un mantel de mesa con lista encarnada y una cesta.

Acerca de cuyo hecho me hallo instruyendo causa, y á pesar de las diligencias practicadas, no ha sido posible conseguir el paradero de dichas prendas, ni quienes fuesen los autores, por lo cual he acordado publicarlo á medio de edictos, encargando á todas las autoridades y agentes de policia judicial caso lleguen á dar con ellas las pongan con las personas en cuyo poder se encuentra á disposicion de este Juzgado.

Dado en Vigo á 22 de Setiembre de 1879.—Manuel Valcarce Ibarrola.—D. S. O., Leopoldo Alvarez Bugallal.

ANUNCIOS.

GRAN ALMACEN
de música, pianos, órganos é instrumentos de todas clases para
banda militar y orquesta
DE
RAMON MODESTO VALENCIA.
ORENSE.—PUERTA DE AIRE, 34.
VENTA Á PLAZOS Y AL CONTADO.

INTERESANTE.

Venta á plazos semanales, mensuales y como mejor convenga, desde tres reales semanales en adelante.

En Orense.—Calle de Viriato, nú.

meros 1 y 2, platería de Sampayo y Nóvoa. Acaba de recibirse en este acreditado establecimiento un gran surtido de relojes de bolsillo desde el infimo precio de 60 reales en adelante, un surtido de leontinas de acero, metal blanco, niquel, luto, doble fino, de un real hasta 160 una. Las en oro desde 600 hasta 2.000.

Se toma á cambio plata, oro y piedras finas por todo su valor, y se cambian relojes.

Tambien se componen á precios arreglados y se garantizan todos los objetos incluso las composturas siempre que lleguen á 20 reales.

MAQUINAS PARA COSER

DE

LA COMPANIA FABRIL



SINGER.

GRAN REBAJA

TODOS LOS MODELOS

10 RS. SEMANALES,

SIN ENTRADA, NI ADELANTO, NI AUMENTO. (NADA MAS QUE 10 RS. AL LLEVAR LA MÁQUINA!)

120 premios, los mas altos y honrosos obtenidos en todas las Exposiciones.

ACEPTACION UNIVERSAL SIN COMPETENCIA.

Esta casa vendió en 1878,

356,432 MÁQUINAS,

es decir 73.620 mas que en 1877.

Las únicas para el trabajo doméstico y fábricas de camisas, cuellos, puños, corsés, zapatos, guarniciones y para todo lo que sea coser en cualquier forma.

Enseñanza gratis.

Se atiende á cualquiera que tenga una máquina SINGER: no importa la época y el lugar en que la haya adquirido. La superioridad de sus máquinas y el gran capital de que dispone, colocan á esta Compañia en condiciones de hacer al público

VENTAJAS INCREIBLES!

por cualquier máquina

10 REALES SEMANALES.

Pídanse Catálogos ilustrados, con cuantas noticias se deseen, dirigiéndose á La Compañia Fabril SINGER en cualquier poblacion del mundo de alguna importancia.

ORENSE, PAZ, 30, ORENSE.

Agentes autorizados.

VERIN,

MANUEL GOMEZ,

CALLE MAYOR, 27.

CELANOVA

NIVARDO REQUEIRO,

SAN ROQUE 1.

ORENSE: INT. DE JOSÉ M RAMOS